



Un viaje al microcosmos del caos

(Sara Pantoja, pág. 6-10)

En la entrada del mercado popular El Manto, en la colonia del mismo nombre en la alcaldía Iztapalapa –el centro de la pandemia de covid-19 en el país entero–, una mujer se molesta porque los locatarios le piden ponerse un cubrebocas y lavarse las manos con gel antibacterial para dejarla entrar. “Todos ustedes están mal –les dice–. El virus no existe. La suya es falta de ignorancia (sic)”.

–¿Usted no cree que el virus existe, señora? –pregunta la reportera.

–No. A ver, ¿por qué si los chinos crearon el virus, no mandan la vacuna? Si Dios hizo resucitar a un muerto, que no pueda quitar el virus. ¡Por favor!

Visiblemente enojada la mujer se queda en la puerta del mercado en espera de que la locataria que vende comida preparada le lleve su pedido. Al recibirlo, le paga y se aleja entre murmullos.

De los 2 mil 457 municipios del país, Iztapalapa registra el mayor número de incidencias por covid-19: mil 680 confirmados acumulados, 506 activos y 119 defunciones hasta el corte del viernes 8, según el “Monitoreo de casos en México por municipios” hecho por la UNAM, con base en cifras de la Secretaría de Salud.

Según esta dependencia, hasta ese día en la Cdmx había 8 mil 705 casos confirmados acumulados, de los cuales 2 mil 95 estaban activos y las defunciones sumaban 729. En el ámbito nacional había 31 mil 522 acumulados, 8 mil 48 activos y 3 mil 160 muertes.

La zona más crítica

Con sus poco más de un millón 815 mil habitantes Iztapalapa es la alcaldía más poblada de las 16 de la capital. Es también la que registra más índices delincuenciales, pobreza, hacinamiento y asentamientos irregulares, una histórica carencia de agua potable y ahora también es la demarcación con más casos de covid-19.

Iztapalapa colinda con varios municipios del Estado de México, la segunda entidad con mayor número de casos de la pandemia a escala nacional, con 5 mil 418 hasta el viernes 8.

Datos proporcionados ese día por la Secretaría de Salud indican que la zona oriente del Valle de México se ha convertido en la más contagiada por la pandemia en todo el país, con 6 mil 108 casos.



En ese entorno están precisamente Iztapalapa (mil 680 casos), junto con los municipios mexiquenses de Ecatepec (669), Nezahualcóyotl (719), Chimalhuacán (294), Los Reyes La Paz (112), Ixtapaluca (192), Valle de Chalco (142) y Chalco (217), así como las alcaldías de Iztacalco (534), Gustavo A. Madero (mil 139) y Venustiano Carranza (410).

“Vamos hacia una hambruna”

(Rodrigo Vera, pág. 18-21)

El presidente de Cáritas Mexicana, el sacerdote regiomontano Rogelio Narváez Martínez, dice con su acento nortño: “En México vamos hacia una hambruna. Estamos por entrar en un periodo de supervivencia. No es ninguna exageración de nuestra parte. Por eso estamos invitando a la sociedad a que se solidarice con los más necesitados, pues ante esta emergencia no es válido quedarse con los brazos cruzados”.

Para afrontar esta escasez de alimentos que ya empieza a ocurrir en algunas zonas del país, debido al descalabro económico causado por el coronavirus, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) le encargó a Narváez coordinar dos programas de alcance nacional: las llamadas Redes Vecinales de Solidaridad (Reves) y Familias sin Hambre, puestos en marcha con pocos días de diferencia.

Con las Reves se apuesta a que, vía las parroquias, en las mismas comunidades se recolecten víveres y medicinas para dárselos a sus miembros más vulnerables, realizando así un ejercicio de “autogestión”.

Familias sin Hambre consiste en recabar donativos de la población en general para comprar despensas y entregarlas a las familias que ya padecen los estragos de la hambruna.

—¿Por qué dos distintos programas de la Iglesia para combatir el hambre?

El de las Reves es un programa autogestivo, pues las capacidades humanas de cada integrante de una comunidad se ponen al servicio del otro. En una mesa solidaria se comparte el alimento con quien no lo tiene. Y el médico o la enfermera del barrio ofrecen sus servicios a sus vecinos.

“En la Iglesia siempre trabajamos con la autogestión, para así fortalecer a las comunidades y no crear dependencias, pues la caridad que crea dependencia se convierte en paternalismo. De manera que seguiremos trabajando con la autogestión”, explica el sacerdote vía telefónica desde el municipio veracruzano de Córdoba, donde trabaja en su encomienda.



Menciona que para echar a andar los proyectos colaboraron con la Compañía de Jesús que ya lleva tiempo trabajando con redes solidarias, tuvieron reuniones y capacitaron al personal. Y de esa manera unas tres semanas antes de Semana Santa comenzaron a implementar las Reves a nivel parroquial.

“Sin embargo, vimos que llegará el momento en que el jefe de manzana o el párroco van a decir: ‘Ya agotamos nuestros recursos comunitarios, ya no tenemos comida porque la crisis se está prolongando’.

“El destino nos alcanzó. Estamos en una emergencia. Por eso también decidimos pedir donativos a la población en general y trabajar en dos pistas, con dos programas a la vez”.

Expone que es común que, de pronto, un párroco les hable y les diga: “Necesito despensas para 10 familias de mi comunidad”. Entonces, ellos se las llevan. **“Esa es una solicitud colectiva, pero igual mandamos víveres para grupos vulnerables, como los migrantes. Es lo que hacemos con los albergues para migrantes que tiene el episcopado en el territorio nacional”.**

Narváez recuerda que, incluso, han tenido que ayudar a indocumentados sudamericanos y caribeños. “Nos acaban de llamar de un colectivo llamado Colpaz, para apoyar a un grupo de colombianos, venezolanos y cubanos. En este momento hemos tenido, incluso, solicitudes de estudiantes y turistas extranjeros que por la pandemia se quedaron varados en México y no pueden regresar a sus países”.

Jaime Montejo, siempre entre nosotros

(Marta Lamas, pág. 48-49)

Además de muy doloroso para mí, el fallecimiento de Jaime Montejo, uno de los activistas más heroicos y ejemplares que he conocido, es una gran pérdida para la sociedad. Él era parte esencial del equipo que, con el nombre de Brigada Callejera, sostiene una labor de apoyo y defensa a trabajadorxs sexuales, migrantes e indígenas.

Lo conocí a principios de los noventa, cuando junto con su mujer, Elvira Madrid, y su cuñada, Rosa Icela Madrid, apoyaban a las trabajadoras sexuales de la Merced. Discípulos de Francisco Gomezjara en la UNAM, dejaron la universidad para dedicarse de lleno al activismo. Muy pronto se dieron cuenta de que necesitaban tener “personalidad jurídica” y fundaron entonces una asociación civil sin fines de lucro, apartidista y laica, para hacer la defensa y la capacitación política a mujeres trabajadoras sexuales de la calle.



Además, el equipo de Brigada, muy preocupado por la situación de las centroamericanas migrantes indocumentadas que encuentran en el trabajo sexual una forma de subsistencia, abrió un centro de atención en Tapachula. Imposible dar cuenta del impresionante trabajo que Jaime llevó a cabo junto con Elvira, Rosa Icela y les demás compañeros del equipo. Por cierto, debido a ese trabajo el año pasado el Conapred les otorgó el Reconocimiento por la Igualdad y la no Discriminación 2019, en la categoría institucional.

Hank, la familia consentida

(Mathieu Tourliere, pág. 36-40)

Recientemente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido generoso con la familia Hank, destacada integrante de la élite empresarial enriquecida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto: en los primeros tres meses de 2020, empresas encabezadas por Carlos Hank González y su padre Carlos Hank Rhon recibieron al menos 24 contratos públicos federales por un monto de más de 7 mil 695 millones de pesos.

Estos contratos, que Proceso identificó en Compranet –la plataforma de contrataciones públicas–, convirtieron a los descendientes del “profesor” Carlos Hank González, otrora líder del Grupo Atlacomulco, en los terceros contratistas del gobierno de la Cuarta Transformación en lo que va de 2020.

Los primeros proveedores son el magnate Carlos Slim Helú –a través de su constructora Cicsa– y el consorcio formado por la empresa paraestatal china China Communications Construction Company Ltd y la portuguesa Mota-Engil –una de las empresas más favorecidas en contratos de obra pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto–, que obtuvieron contratos para los primeros dos tramos del Tren Maya por montos de 18 mil 553 millones y 15 mil 538 millones de pesos, respectivamente.

Según esa base de datos, Grupo Banorte obtuvo 6 mil 885 millones de pesos a través de 23 contratos por diversos seguros, y en febrero pasado La Peninsular, filial de Grupo Hermes, obtuvo un contrato de obra pública del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), por 809 millones 967 mil pesos; dos meses antes, la misma FIT había otorgado un contrato por 100 millones 899 mil pesos a Seguros Banorte.

Los herederos de Hank González –al que López Obrador describió en 1996 como “el gran ‘capo’ de la política mexicana”– lograron su reacomodo en el gobierno actual, a pesar de su ADN priista y de haber acrecentado su poder a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto en los sectores financiero, de la construcción, energético y hotelero.



Con un historial controversial, Carlos Hank Rhon forma parte de los 12 multimillonarios mexicanos que apareció en la lista de Forbes a principios de abril: la revista estadounidense estimó su fortuna en 2 mil millones de dólares.

Su hijo, Hank González, heredó el capital político de su abuelo paterno y el Banco Interacciones de su padre –asumió la dirección de la institución en 2000, con apenas 29 años–; del lado materno, su abuelo regiomontano Roberto González Barrera le dejó Grupo Financiero Banorte y parte de Grupo Maseca, el imperio agroindustrial mexicano basado en la harina de maíz, del que es ahora vicepresidente del Consejo de Administración.